

Conferencia Colectivo Militante

Documento - Economía

Gobierno del Frente Amplio:

La sucesión neoconservadora

1. El curso social-liberal

La capa dirigente del Frente Amplio adoptó, finalmente, la idea de que el “modelo económico” es permanente y, por lo tanto, una “política de Estado”. En tal sentido, lo que se disputó en las elecciones nacionales de octubre 2004, fueron distintas competencias para gestionarlo. En todo caso, las diferencias entre el “progresismo” y los partidos burgueses, estribaron en la capacidad para “manejar los instrumentos económicos” y en la “sensibilidad” para enfatizar los “problemas sociales”. De tal manera, quedaron establecidas las reglas políticas de la sucesión neoconservadora (neoliberal en el lenguaje común) bajo conducción de un “gobierno popular”.

Esta conversión de la capa dirigente del Frente Amplio al “libre-comercio” y a las directivas emanadas de las instituciones financieras internacionales, no es un salto abrupto que se produce a partir de la llegada al edificio Libertad. Sino que es el resultado de un largo proceso socio-político que tuvo su empuje por inicios de los años 90 (momento más crítico de la ofensiva del capital contra la clase trabajadora).

La conversión social-liberal de la capa dirigente del Frente Amplio coincide, en el tiempo, con las modificaciones programáticas y estratégicas registradas en la izquierda “oficial” latinoamericana, luego del derrumbe de la URSS y demás regímenes estalinistas en Europa del Este, el cierre del ciclo revolucionario en América Central (Nicaragua, El Salvador, Guatemala), y los impasses políticos y socio-económicos en Cuba. [1]

En el aporte presentado por la CUR a la Fuerza Militante Revolucionaria, insistíamos sobre este aspecto: *“Las alianzas con fracciones decisivas de la burguesía, los pactos programáticos y la subordinación a la gobernabilidad democrática, se explican, entre otras razones, por la derrotas de la clase trabajadora, las mutaciones políticas, ideológicas, sociales y culturales que atravesaron a la izquierda en las dos últimas décadas a escala nacional e internacional, y por el carácter destructor de la ofensiva neoliberal.”* [2]

El programa de gobierno, adoptado en el último Congreso del Frente Amplio (diciembre 2003), institucionalizó esa conversión social-liberal. Es decir, la adopción por una fuerza de origen popular y antiimperialista con componentes anticapitalistas y socialistas, de una línea programática esencialmente neoliberal. [3]

De allí, que la política económica estuviera definida – tanto en su contenido como en su formato – desde mucho antes del 1º de marzo 2005. Haciendo añicos toda ilusión en torno a una supuesta “disputa” por el rumbo programático del gobierno entre una visión “ortodoxa-fiscalista” y otra “social-desarrollista.” Ya en noviembre 2004, en el marco del debate interno en la Corriente de Izquierda (previo a la ruptura del IV Congreso), describíamos los trazos generales de lo que sería el programa del gobierno. [4]

¹ Ver “América Latina: crisis continental y construcción de alternativas”. Ernesto Herrera y Charles-André Udry. Revista Desde los 4 Puntos N° 57, septiembre 2004, México.

² Aporte a la discusión en el Plenario de la Fuerza Militante Revolucionaria. CUR, 7 de febrero 2006

³ El Congreso del FA aprobó el programa de gobierno, con el solo voto en contra del delegado de la Corriente de Izquierda, en ese momento el compañero Mario Pieri.

⁴ Ver “Apuntes provisorios después de la victoria ¿cuáles perspectivas? ¿cuáles tareas?” Documento presentado por diez miembros de la dirección nacional de la CI.

El curso posterior (hacia la derecha) fue mucho más acelerado que el pronosticado. Apenas tres meses después de asumir la presidencia, Tabaré Vázquez, ante un auditorio de 500 empresarios, banqueros e inversores, reunidos en Buenos Aires por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, ponía las cartas sobre la mesa: *“Se pronunció por el libre mercado, ofertó una canasta de oportunidades para asociarse con empresas estatales y aseguró, una vez más, que en Uruguay no hay discriminación entre inversiones nacionales y extranjeras (...) porque la inversión pública está acotada”*. Y volvió a insistir sobre la *“libre repatriación de utilidades (...) el respeto al secreto bancario (...) y la garantía de honrar puntualmente la deuda externa”*. [5]

El balance de estos dos años de gobierno del Frente Amplio es tan categórico que despeja cualquier doble lectura. Por el contrario: *“confirma que el ‘colapso neoliberal’ ha encontrado una salida transitoria en el ‘progresismo’ gubernamental. Lo que implica la continuidad - aún bajo ‘nuevas’ modalidades que pueden confundir - de las contrarreformas y su correlato en términos de confiscación salarial, desempleo, precarización, pobreza, expropiación de derechos democráticos adquiridos (...)”* [6]

Este “balance de gestión” es aprobado, en lo fundamental, por las corporaciones patronales, las instituciones financieras internacionales, y hasta por la prensa financiera internacional. No por casualidad, el conservador semanario británico The Economist, realizó aquí, junto a doscientos empresarios uruguayos y extranjeros, su “Economist Intelligence Unit”, bajo el sugestivo título de “Buscando el nicho de Uruguay en el mercado global”. [7]

En este contexto, las “asignaturas pendientes” aparecen como daños colaterales de una “exitosa administración de la crisis heredada”. [8] ¿Qué dicen esas “asignaturas pendientes”? Que hay 750 mil personas en la pobreza y más de 80 mil en la indigencia; que más de 460 mil trabajadores están subempleados y no tienen ninguna cobertura social; que más de 150 mil personas están desempleadas; que la brecha de la desigualdad se profundiza, mientras el 20% más rico de la población se queda con 50.5% del ingreso nacional, y que el 20% más pobre apenas con el 5%; [9] que solo en 2006, casi 18 mil personas se vieron obligados a irse del país por razones económicas.

2. La euforia del “crecimiento”

Todas las expectativas están puestas en el crecimiento del PIB y en la “favorable coyuntura internacional”. A partir de allí, tanto el gobierno como distintos analistas económicos visualizan la posibilidad de “nuevos horizontes” en el terreno económico.

Por cuarto año consecutivo el PIB volvió a crecer. Según datos oficiales [10] la expansión del PIB fue del 7% al cierre de 2006. Recordamos que en 2003 el PBI creció 2,2% en 2004 11,8% y en 2005 6,6%. En los últimos cuatro años el PBI creció 30,3% en un cuadro regional que, según CEPAL, el crecimiento fue del 5,3% para América Latina y el Caribe.

El incremento de la producción se refleja en todos los sectores de la economía, en especial el crecimiento de la industria manufacturera que creció 8,5%. Este crecimiento de la industria manufacturera se sustenta básicamente en el crecimiento de la demanda externa y una “recuperación del consumo privado”. Fundamentalmente crecieron las industrias ligadas a las exportaciones, básicamente las que industrializan insumos de base primaria (7,8 % a setiembre de 2006), en especial frigoríficos y otros alimentos. Si bien la participación de la industria

⁵ “Tabaré Vázquez más cerca de Lula que de Kirchner”. Nota de tapa del diario argentino Ambito Financiero, 6-5-05.

⁶ Editorial de Construyendo N° 22, marzo 2007.

⁷ Ver nota del programa En Perspectiva, 27-3-07 de radio El Espectador: <http://espectador.com>

⁸ Jorge Notaro, “Las asignaturas pendientes”. Detrás de los números, semanario Brecha, 13-4-07

⁹ Carolina Villalba, “Gasto social en América Latina. Crece y crece pero la pobreza no disminuye”. Revista Peripecias N° 43, 11-4-07.

¹⁰ Datos del Banco Central, viernes 23 de marzo de 2007.

manufacturera en el PIB en 1990 era 24,7%; en 1998, 19,6%; en 2002, 15,9%; y en 2006, 20,1%, ha habido un cambio en el contenido de estas cifras.

En el caso del sector Agropecuario, creció 8,5% y explicó un punto porcentual del crecimiento total de la economía. Este dinamismo es consecuencia tanto de un buen año de la actividad pecuaria como de la actividad agrícola. Es el cuarto año de crecimiento consecutivo del PBI del sector que creció entre 2002 y 2006 35% y se estima continuará creciendo en 2007. En este caso, hay un fuerte proceso de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra, y de los frigoríficos. Este sector estratégico para el desarrollo del país pasa a formar parte de la estrategia de obtención de utilidades de empresas extranjeras y de las políticas económico-empresariales de otro Estado. Esto limita tanto las políticas de redistribución así como las decisiones soberanas del Estado sobre la promoción de cadenas productivas en el sector. [11]

Y por último, el caso del agregado "Comercio, Restaurantes y Hoteles" que creció 8,4% y explicó un punto porcentual del 7% de crecimiento total. La construcción también tuvo una fuerte expansión al impulso de las grandes obras como las plantas de celulosa, las centrales de ciclo combinado de UTE y las torres de lujo en Punta del Este, que no se van a repetir el próximo año.

El gobierno prevé un crecimiento del 4,5% para el 2007 (6% para la CEPAL). Se explica el crecimiento del PBI como resultado del aumento de la demanda externa así como de la demanda interna. *"Las exportaciones de bienes acusaron un aumento interanual en dólares del 19,5% entre enero y octubre, destacándose como principales destinos individuales Brasil (13,8%), Estados Unidos (13,2%), Argentina (7,5%), y la Federación de Rusia (6,3%). Las importaciones de bienes crecieron un 26% en dólares en el mismo período y se caracterizaron por una importante participación del componente energético (25% del total de las importaciones) y una sostenida demanda de bienes de consumo y de capital."* [12]

El aumento de las exportaciones fue de 7,6% en volumen, y aquí están consideradas tanto las exportaciones de bienes como las de servicios. Tengamos en cuenta que en 2005 el crecimiento fue de 16,3%, y en 2004 había sido de 30%. Y la Inversión en Activo Fijo, ligada a la acumulación de bienes de capital, creció 32%. En este último caso el aumento se dio en el rubro maquinaria y equipo del sector privado. La inversión pública se elevó un 74% y la privada un 14% en relación al año anterior. Sin embargo la inversión global sigue siendo baja respecto a los países de la región.

Lo importante a destacar, es que hubo una "desaceleración" en el correr del año pasado básicamente las ramas orientadas a la exportación como a la sustitución de importaciones. La explicación pasa por la "pérdida de competitividad" relacionada al tipo de cambio y por el bajo nivel de inversión, estamos al tope de una capacidad ociosa que era muy elevada en el 2003. Si no hay un aumento sustancial de la inversión el crecimiento industrial se irá frenando.

En el terreno de los "gastos" del Estado, hubo un aumento de la recaudación por un lado y una caída de las utilidades de las empresas públicas por el otro. En resumen, en los 12 meses transcurridos a setiembre de 2006 los ingresos fiscales se elevaron un 6,8% y el gasto primario un 2,7%. El resultado fue un superávit fiscal primario de un 3,6% del PIB. Como se pagaron 4,4% del PIB de intereses de la deuda externa el déficit fiscal consolidado fue de un 0,8% del PIB.

Las política monetaria en sintonía con el programa de gobierno mantiene como objetivo la estabilidad de precios el índice de precios al consumidor fue de 6,2% en el año finalizado en noviembre de 2006. Sin embargo, el Banco Central ha tomado medidas restrictivas para frenar el ritmo expansivo de la cantidad de dinero. Es que la inflación en marzo fue de 0,9% y anualizada llega al 7,4% lejos del rango entre 4,5% y 6,5% previsto por el gobierno para el 2007. La mayor incidencia fue el incremento del rubro "alimentos y bebidas", donde se destacan la suba de la carne, de los lácteos y especialmente las verduras, que crecieron 12% en el mes y más del 35% en el último año móvil. El segundo rubro de mayor incidencia en marzo fue el de "transporte y comunicaciones", por la suba de los combustibles, del servicio de

¹¹ Gabriel Papa "El agro gana, ¿gana el país?", Semanario Brecha 5 de enero de 2007.

¹² CEPAL, Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2006.

taxi y del boleto. La vestimenta y la vivienda (que incluye alquiler, gastos comunes y tarifas) presentaron una mayor suba respecto a igual mes del año pasado. Las tarifas públicas están subiendo 6%. Los precios de los bienes transables un 6% y los no transables 8%.

Esto impacta directamente sobre el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, quienes utilizan todo su ingreso en el consumo de estos bienes y no tienen capacidad de ahorro.

3. La deuda cambia de dueño

Con el pago anticipado de U\$S 1.080 millones, efectuado el 14 de noviembre 2006, el gobierno anunció la cancelación del programa económico con el FMI que finalizaba en junio 2008. Desde el gobierno, la decisión fue presentada como un “acto de soberanía sin precedentes” que, según el ministro Astori, no puede leerse como una señal de distanciamiento con el FMI. Es decir: el tutelaje seguirá tal cual, incluido el “monitoreo” regular por parte de los funcionarios del Fondo.

La decisión, afirman desde el gobierno, fue una “salida amistosa, cordial y prolija” que permite ganar “versatilidad” en términos de una política económica regida por las pautas establecidas en la Carta de Intención firmada en 2005. El plan de “reformas estructurales” (reforma tributaria, asociación público-privada de las empresas estatales, autonomía del Banco Central) continúa en pie, aunque ahora no tendrán fecha límite para su aprobación. Simultáneamente, el superávit primario (saldo positivo del presupuesto antes de pagar los intereses de la deuda) se mantendrá como pilar de la “austeridad” para impedir el descontrol del “gasto público” (inversiones en salud, educación, vivienda, infraestructura básica, salarios y jubilaciones). En todo caso, habrá un abrir la mano para cuando se acerquen las elecciones.

El cancelamiento con el FMI, se enmarca dentro de la política de “desendeudamiento” y “reperfilamiento” de la deuda externa que el país viene practicando desde finales de 2005. De esta manera se llevaron adelante sucesivas colocaciones de bonos en el mercado internacional, las que hicieron posible la operación de cancelamiento con el FMI. Sin embargo, es necesario resaltar que la decisión del gobierno no supone una disminución en el nivel de endeudamiento del país, sino un cambio en la composición mayoritaria de los acreedores, que ahora son bonistas extranjeros (bancos y fondos de pensión privados). A fines de diciembre, la deuda pública bruta alcanzaba a U\$S 13.709 millones. Un año atrás, el Estado debía U\$S 13.944 millones. O sea que la deuda pública bajó en el último año U\$S 235 millones.

Al terminar el 2006, la deuda con acreedores oficiales el BID y el Banco Mundial sumaba U\$S 2.683 millones, un 20% de la deuda bruta total en números redondos. La deuda pública bruta se había situado a fines de 2005 en un 83% del PBI y el año pasado volvió a bajar, gracias al fuerte aumento del PBI medido en dólares. La deuda bruta se ubicó a fin del año pasado en 71% del PBI. Sigue siendo una deuda muy alta, pero claramente menor al máximo de casi 110% del PIB que teníamos en 2003. La deuda bruta cayó U\$S 235 millones. Pero como los activos del sector público cayeron más, cayeron en U\$S 485 millones, el resultado final fue que la deuda neta subió el año pasado en unos U\$S 250 millones, pasando de U\$S 8.894 millones a fin de 2005 a U\$S 9.145 millones a fin de 2006.

Y nos queda luego la deuda con acreedores privados como se la denomina, que está compuesta en su mayoría por las diversas series de bonos y letras que se emitieron. Esa deuda suma unos U\$S 11.000 millones y creció el año pasado más de U\$S 2.600 millones como resultado de la estrategia del gobierno. En el 2003, el 46% de la deuda externa pública correspondía a las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial, BID), mientras que en junio de 2006, esa cifra habrá bajado al 32%.

Al evaluar el contexto regional y la situación política y económica nacional, es necesario relativizar las consecuencias de la decisión adoptada por el gobierno. No depender de un programa rígido (Carta de Intención), supone un manejo económico “menos condicionado” pero no menos “ordenado”. Es lo que vociferan todos los economistas liberales, los partidos burgueses, las corporaciones empresariales...y el equipo económico del gobierno.

La decisión de cancelar la deuda con el FMI, es ante todo un acto cargado de simbolismo. Por dos razones. Primero, porque la sangría de recursos continúa: las “obligaciones” por concepto de amortizaciones e intereses alcanzan los U\$S 1.722 millones para este año y U\$S 1.515 millones para el próximo, cuando, según el calendario de pagos publicado por el Banco Central, se deberán pagar solo por intereses, U\$S 830 millones. [13] Segundo, porque el gobierno no piensa en dar comienzo a una etapa de mayor justicia social. La prometida “redistribución de la riqueza” queda siempre postergada, aún cuando los propios números del gobierno muestren que existen fondos disponibles.

Pero la decisión de cancelar la deuda con el FMI no deja de tener sus riesgos para el gobierno: a disponibilidad de una mayor “versatilidad” y la “perdida de las condicionalidades” del FMI, no dejan de ser un arma de doble filo. Ayer, el programa con el FMI era utilizado como un escudo ante los reclamos populares y sindicales y un “sello de calidad” ante los inversores. Hoy, las demandas para saldar las otras deudas pendientes (con la clase trabajadora) y obtener mayores recursos para cubrir las necesidades sociales básicas, (empleo, salario, salud, educación, vivienda), no encuentran la coartada de las “condicionalidades”. Por el contrario, habría una situación más favorable para que los sindicatos y el movimiento popular, rompieran con su dinámica de resistencia acotada y elevaran el piso de sus exigencias socio-económicas.

4. Una crisis social aplastante

“Al aumentar a la vez el desempleo y el miedo al desempleo, la crisis tiende a hacer aceptar a los trabajadores las bajas (o estancamiento) de los salarios reales, la aceleración de las cadencias, las pérdidas de logros en materia de condiciones de trabajo y de seguridad social, la reducción de las protecciones erigidas en la fase de prosperidad contra la pobreza y la injusticia más flagrantes.” Ernest Mandel [14]

a) salario

Finalizado el 2006 el número de personas ocupadas superaron las cifras de 1998 último año de crecimiento antes de la crisis. Durante 2006 trabajaron 1.200.000 personas en centros poblados y 200 mil en el medio rural. Las cifras más altas en la historia del país. Sin embargo la participación de la masa salarial en el Ingreso Nacional Bruto Disponible (INBD es algo menor que el PBI porque se descuentan las transferencias de ingresos al exterior) no alcanzó las cifras de 1998.

La participación de la masa salarial [15] en el INBD pasó de 31% entre 1998-2002 a 17,5% en 2004. La masa salarial aumentó 4,48% en 1998 (último año de crecimiento de la economía 4,6% antes de la crisis), en 1999 disminuyó 1,64%, en 2000 se redujo 4,98%, en 2001 volvió a caer 2,4%, en 2002 anotó su peor año con una contracción de 38,13%, en 2003 retomó una tendencia expansiva con un crecimiento de 1,43%, en 2004 aumentó 8,79%, en 2005 lo hizo 4,04% y el año pasado 19,03%. Las proyecciones para 2007 establecen que el aumento no continuará. La masa salarial a diciembre del año pasado se ubicó a 9,66% por debajo de la que había al comienzo de la crisis. [16]

Si continúa la actual política de contención salarial mediada por los Consejos de Salarios la participación de la masa salarial en el INBD se ubicará unos 10 puntos porcentuales por debajo del trienio 1998-2000. [17] En cada uno de estos años unos 1700 millones de dólares que antes recibían los asalariados y sus familias fueron apropiados por otros grupos sociales, 50 mil pesos por año por trabajador. Los jubilados y pensionistas en la medida que sus ingresos están atados al índice medio de salarios no corrieron mejor suerte. Esto significó un sustancial aumento de la tasa de explotación y su apropiación por parte de las patronales.

¹³ Gabriel Papa, “Entre el viejo y el nuevo espacio fiscal”, Semanario Brecha, 4 de mayo 2007.

¹⁴ Ernest Mandel, La Crisis. Capítulo “El movimiento obrero ante la crisis”. ERA, México 1980

¹⁵ La masa salarial es determinada por el número de empleos disponibles en la economía, y por el nivel de las remuneraciones.

¹⁶ Estudio del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, tomado de Espectador.com

¹⁷ Jorge Notaro, “El vaso medio vacío”. Detrás de los números, Semanario Brecha 2 de marzo de 2007.

Con la reducción del empleo y la aparición del desempleo completo y parcial, la masa total de plusvalor producido se reduce en relación al último año de crecimiento económico. Es el desarrollo de la lucha de clases la que define quien paga el costo de la crisis. El aumento de la tasa de explotación tiene el objetivo de evitar la caída de la tasa de ganancia, y aunque esto no sea posible para el conjunto de las empresas (en la medida que la masa de plusvalor se ha reducido) sí lo es para las empresas en términos individuales.

Los datos presentados muestran que la ofensiva patronal sobre los ingresos de los trabajadores ha obtenido éxitos duraderos al reducir sustancialmente la participación de la masa salarial en el INBD.

La política salarial del gobierno apunta a mantener la expropiación que los empresarios hicieron de los salarios durante la crisis. A pesar de la convocatoria a los Consejos de Salarios el gobierno estableció pautas que no pusieran en cuestión la estabilidad macroeconómica, no podían superar el 2, al 4% por encima de la inflación para el período 1º de julio de 2005 al 1º de julio de 2006. El aumento de los salarios reales por encima de esta pauta fue resultado del aumento del salario mínimo nacional del 89% en 2005 y del salario del servicio doméstico del 45% así como de la formalización de remuneraciones que se pagaban pero que no se declaraban ante el BPS.

Las pautas para el próximo período son igual de restrictivas estableciendo un rango de entre 3,5% y 5,5% por encima de la inflación esperada en tres ajustes semestrales que va desde 1º de julio de 2006 hasta finalizar el 2007. Lo más probable es que los salarios se ajusten a las pautas en la medida que los tres aspectos que coadyuvaban a que los salarios superaran levemente el techo establecido en el período anterior no van a estar presentes, y no se avizora que el PIT-CNT inicie un plan de movilizaciones por aumento de salarios como no lo hizo en el período anterior.

Finalmente durante 2006 los salarios reales de toda la economía subieron 4,5% promedio (3,4% los públicos y 5% los privados), ya habían subido 4,6% en 2005. Va a haber un crecimiento promedio del salario real que ronda el 10% cuando el PBI creció estos cuatro últimos años 30,3%. Cuando el PBI ya superó al de 1998 los salarios en promedio todavía están 16,2% por debajo de ese año y en el caso de los privados 18,2%. ^[18]

También el período se destaca por un aumento de la productividad del trabajo. Es decir cada trabajador genera más riqueza con su esfuerzo. Esto puede ser el resultado del aumento de las horas trabajadas (aumento del plusvalor absoluto) o por la incorporación de nueva tecnología que sustituye mano de obra (aumento del plusvalor relativo).

Según información del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) no hay un aumento de las horas trabajadas sino que estas cayeron durante toda la crisis excepto entre el segundo trimestre de 2004 y el tercer trimestre de 2005. También cayeron en el 2006 a pesar del crecimiento de la economía. Todo parece indicar que a pesar de tener una baja inversión que aún no llega a los máximos de 1998 las patronales están incorporando tecnología que son menos intensivas en la utilización de fuerza de trabajo.

Como conclusión en este terreno, podemos decir que la política de “austeridad” salarial (de congelamiento en los hechos), contribuyó al aumento de las exportaciones, pero bloqueó el consumo de los trabajadores. Y que la (des)valorización de los salarios es un factor clave que incide en los índices de pobreza, en la medida que se amplía la franja de los “pobres asalariados”.

El último informe del INE (30 de abril 2007), reafirma que la desigualdad de ingresos lejos de achicarse se ensancha: el “poder de compra” de los salarios volvió a caer por segundo mes consecutivo (1% acumulado en febrero-marzo 2007), mientras que los patrones vieron aumentados sus ingresos en 12%, durante 2006. ^[19]

¹⁸ Alfonso Lema, Tea Deloitte & Touche. Análisis sobre la suba del salario real en el 2006.

¹⁹ El Observador Económico, 2 de mayo 2007.

b) trabajo

En los últimos tres años, el empleo había mejorado en tres aspectos: trabajaron más personas, hubo menos desocupados y se precisó menos tiempo par encontrar trabajo. En 2006 el número de personas trabajando es el máximo que conoce el país, 1.175.000 en localidades de 5 mil habitantes o más.

Sin embargo, en febrero-marzo 2007, el desempleo volvió a ubicarse en el 10,5%, luego de haber bajado a finales del 2006, a 9,5%. En Montevideo la tasa de desempleo alcanza el 9,4% y en el Interior el 10,1%. Las mujeres y los jóvenes son los más perjudicados. La tasa específica de desempleo femenino se ubica en el 14,4%. de todo el país; y el desempleo de los menores de 25 años, llega al 25%. [²⁰]

En relación al crecimiento del PBI, que fue de un 30,3% el número de personas ocupadas creció 11%. La incorporación de tecnología que desplaza mano de obra hace que cada vez se necesite un mayor crecimiento de la economía para generar nuevos empleos. Si bien hay un aumento de la formalización, el subempleo y el trabajo en negro (cerca del 30% de la PEA), retroceden muy lentamente.

Hay que considerar, que las personas que desean trabajar se consideran la “oferta de trabajo”, mientras que los que efectivamente trabajan reflejan la “demanda de trabajo” por parte de las empresas. La particularidad es que este mercado como dicen los analistas no está en equilibrio, hay más oferta que demanda. En 2006 en promedio para todo el país el 60,8% de la población mayor de 14 años manifestó deseos de trabajar y solamente encontró trabajo el 54,2%. Esto representa aproximadamente 170.500 personas desocupadas en todo el país, 10,9% en promedio.

Si a este verdadero ejército industrial de reserva, de desocupados, le sumamos el medio millón de uruguayos que están subempleados o trabajan en negro (son súper explotados) o sea que tienen “problemas” de empleo las dificultades para los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo y de salarios siguen siendo enormes, agravados además por política conciliadora del PIT-CNT. Además, dentro de los trabajadores ocupados, el 13% no llega a trabajar 40 horas semanales. Los trabajadores no registrados se estiman en el 34 %. Hay actividades sin ninguna cobertura de la seguridad social que han crecido sustancialmente como los clasificadores de residuos de Montevideo; según la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS) los clasificadores que eran 3500 en 1992, 9000 en el 2000 llegan hoy a 15000. [²¹]

Los cambios en la estructura productiva del país han modificado la estructura de la clase obrera en los últimos veinte años en tres aspectos: en las condiciones de trabajo con la precarización y la desregulación; en las formas de venta de la fuerza de trabajo con las tercerizaciones y los contratos a término; y en las ramas de actividad con el desarrollo de los sectores financiero y comercial, las empresas de energía y comunicaciones, el transporte, la hotelería y servicios anexos al turismo, así como algunas agroindustrias.[²²]

La disminución de las grandes concentraciones y el desarrollo de las pequeñas empresas, el trabajo por cuenta propia y el trabajo informal. Estos cambios han afectado la capacidad de negociación de los diferentes sectores dentro de la clase obrera, debilitándola en su conjunto. Más si continúa la hemorragia emigratoria; a los 100 mil uruguayos que se fueron durante la crisis 2002-2003, se le siguen agregando 8.500 en 2005 y 17.500 en 2006. Librada a la acción

²⁰ Suplemento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, publicado en El Observador Económico, 2 de mayo 2007.

²¹ Uruguay Ortiz “¿Dónde está la clase obrera?”. La Insignia, 6-2-07.

²² Daniel Olesker, “Transformaciones en el mundo del trabajo”. Red de Estudios de la Economía Mundial (www.redem.buap.mx) citado por Uruguay Ortiz.

del mercado como hasta ahora los problemas estructurales de desempleo y precariedad no se van a solucionar.

c) pobreza e indigencia ^[23]

Según el INE a comienzos de 2006 había 786 mil pobres e indigentes en el país, unos 50 mil menos que en el primer semestre del 2005.^[24] En el total del país urbano (ciudades con más de 5 mil habitantes) la pobreza se ubicaba en 1999 en 15,3%, en 2002 alcanzó el 24,3%, en 2003 al 31,3% y en 2004 llegó al 31,9%.

Como resultado de la reactivación económica, las mejoras en el mercado laboral y el PANES (Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social) aunque no hay un análisis específico sobre el impacto de este último) la pobreza se redujo a 27,4% de la población total en el primer semestre de 2006. ^[25] Entre el primer semestre de 2005 y el mismo período de 2006 unas 93 mil personas salieron de la situación de pobreza y unas 25 mil salieron de la situación de indigencia. En cifras totales y según el mismo estudio los pobres (incluidos los indigentes) pasaron de 879. 800 a 786. 400 en el período referido.²⁶

Es obvio que estos datos son una referencia porque si tenemos en cuenta que la canasta familiar ronda los \$ 30 mil la definición de pobreza e indigencia por el método del ingreso es absolutamente arbitraria. Además aumentó la desigualdad; en el primer semestre de 2005 el 50% de la población percibía el 20,7% del ingreso y en el primer semestre de 2006 esa cifra bajó a 20%. Es decir continúa aumentando la concentración de la riqueza.

d) asentamientos “irregulares”

En el caso de la vivienda es significativo el aumento explosivo de los asentamientos irregulares. ^[27] Entre 1984 y 1994 el número de viviendas en los asentamientos creció a una tasa acumulativa anual de 9,7%. En Montevideo y su periferia, según el INE en 1998 había 348 asentamientos irregulares donde vivían unas 132.400 personas en 32 000 viviendas que representaban el 11,5% de la población total de la capital y el 6,5% de las viviendas. Se infiere que estas cifras aumentaron sustancialmente en los años de la crisis.

Un estudio de la Universidad Católica del Uruguay dice: *“Hoy existen más de cuatrocientos asentamientos en Montevideo y unos setecientos en todo el país”*. ^[28] En valores absolutos, eso significa que cerca de 180 mil personas están viviendo en asentamientos. En Montevideo, la cifra alcanza al 11% de la población. La gran mayoría son desplazados urbanos y mayoritariamente jóvenes, con una mayor educación formal que los “jefes de hogar” que habitaban los antiguos cantegriles. Los ingresos medios de los hogares en los asentamientos son inferiores al ingreso del límite superior del 20% más pobre de la población. Tienen altos niveles de hacinamiento, falta de saneamiento, y ubicadas en zonas inundables. Un alto porcentaje son menores de 18 años, y están compuestos por 5,5 personas en relación al 3,1 del promedio de los hogares.

El precio de los alquileres ha jugado un papel muy importante en la formación de los asentamientos ya que la libre contratación determinó que los alquileres de viviendas para los

²³ De acuerdo al método del ingreso con el cual el INE hace la medición son indigentes aquellos que perciben un ingreso per. cápita mensual que no alcanza para cubrir el valor de una canasta básica de alimentos para una nutrición adecuada, para el primer semestre de 2006 valía \$ 1210. Son pobres quienes pueden acceder a esa canasta pero sus ingresos no le permiten costear otros gastos en bienes y servicios como salud, educación, vestimenta, vivienda, transporte. En este caso el valor de la canasta era de \$ 4150.

²⁴ INE informe 1º de noviembre de 2006.

²⁵ Andrea Vigorito y Verónica Amarante, INE, PNUD.

²⁶ Ver “Derechos Humanos en el Uruguay”, Informe 2006 del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).

²⁷ Información tomada de: Verónica Amarante y Marcelo Caffera. “Los factores determinantes de la formación de asentamientos irregulares. Un análisis económico. Convenio Dinot, MVOTMA.

²⁸ María José Álvarez, “Asentamientos irregulares montevideanos: la desafiliación resistida”. Monitor Social del Uruguay N° 4, IPES, Universidad Católica del Uruguay.

hogares más pobres de Montevideo aumentarán más de un 60%; ello determina que los gastos en alquiler pasaran de representar el 22% del ingreso en 1991 a 29% en 1999. Al ya no estar el BHU que era el que cubría el 20% de la demanda habitacional ello también presiona al alza el precio de los alquileres.

Tanto la política del estado del MVOTMA (Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) del BHU (Banco Hipotecario del Uruguay) y el PIAI (Programa de Integración de Asentamientos Irregulares) [²⁹] han fracasado en resolver los problemas de viviendas. El actual gobierno ha reformulado el PIAI con un nuevo enfoque de supuesta participación democrática de la población involucrada: *“Los planes del PIAI se sustentan en la cogestión, el Estado no va a regalar nada, los terrenos serán vendidos en cuotas que se adecuen a la capacidad de pago de cada familia y lo más que haremos, además de coordinar las tareas, asesorar a los vecinos y representarlos ante las instancias burocráticas, es subsidiar la cuota de los moradores que no puedan pagar, pero subsidiar la cuota, no el monto total.”* [³⁰]

Para el resto de las 242.000 familias uruguayas que habitan viviendas alquiladas el incremento de los mismos fue en 2006 de 15% y se prevé que la Reforma Tributaria que comenzará a regir en julio presionará al alza el precio de los alquileres ya que gravará con un 12% los alquileres de más de \$5000 pero si el propietario tiene otras rentas de más de \$4500 también tributarán los alquileres menores a esa cifra. El gobierno por intermedio del BROU (Banco de la República Oriental del Uruguay) se dispone a otorgar créditos para refacción y compra de vivienda usada. El BHU tiene unas 200 viviendas en venta y unas 700 son arrendadas con opción a compra, además hay unos 70 remates al mes que van a aumentar pues la morosidad del BHU llega al 80%. Si tenemos en cuenta que hay 153.000 ahorristas el déficit empuja a quienes tienen posibilidades a los bancos privados y a los más pobres a los asentamientos.

e) educación

Un informe llamado "Equidad y Calidad de la Educación Básica uruguaya" realizado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Banco Mundial [³¹], concluyó que las calificaciones de los estudiantes uruguayos están muy por debajo del promedio de los países en evaluaciones internacionales.

El documento agrega que de los países analizados, los estudiantes uruguayos registran el mayor nivel de desigualdad en términos de logros académico. A pesar de tener tasas de matrícula más altas en Primaria y Secundaria que la media en América Latina (93% y 59%, respectivamente), Uruguay tiene tasas de matriculación más bajas en Secundaria que Argentina y Brasil.

El informe indicó que en el 2005, el 91,8% de los jóvenes de entre 12 y 14 años en el quintil más bajo de ingreso asistían al liceo, en comparación con el 98% de los quintiles de ingresos más altos. Y que casi la mitad de los uruguayos que ingresa a Secundaria abandona el liceo antes de graduarse, y la mayoría de estos desertores provienen de hogares de ingreso bajo. El porcentaje de jóvenes no matriculados que se encuentran empleados bajó paulatinamente del 11% en 1991 hasta el 4% en 2003. Las altas tasas de deserción combinadas con el incremento en el porcentaje de jóvenes que no están matriculados ni en el mercado laboral son preocupantes.

La tasa de repetición entre los niños de primero de escuelas urbanas de sectores sociales “muy desfavorecidos” fue del 21,3% en el 2005, en tanto fue del 6,6% entre estudiantes de escuelas de entornos socioeconómicos favorables, señala el estudio. Otro aspecto que destaca el informe es que la matrícula en educación Secundaria y Terciaria creció significativamente en los últimos diez años, a pesar del bajo gasto educativo que tiene el gobierno, porque Uruguay destina una de las proporciones más bajas de su PBI en la región para la educación (3,3% en el 2004). El gobierno de Vázquez se comprometió a alcanzar al final del período de gobierno el

²⁹ El PIAI se creó en 1999 con U\$S 110 millones 70% aportado por el BID y 30% el Estado, El gobierno de Jorge Batlle no aplicó estos recursos.

³⁰ Ricardo Muttoni citado en Pablo Long, cita 15.

³¹ Emiliana Vegas Banco Mundial, en colaboración con la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP

4,5% del PBI para la educación, cuando se considera el 6% del PBI la cifra estándar de inversión en educación.

Una estimación realizada por CEPAL-UNESCO en 2005 plantea que para alcanzar en los próximos 10 años metas como universalizar la educación preescolar y primaria, elevar al 75% la cobertura de la educación secundaria y erradicar el analfabetismo adulto los países de la región necesitarían en su conjunto realizar una inversión anual del 7,5% del PBI.

f) salud

Según datos del INE en el año 2005 la atención de la salud de la población urbana se cubría de la siguiente forma: el 42,3% del total se atendía en salud pública; el 45,9% en el sistema mutual; el 1% solo en emergencias móviles; el 8% en algún otro tipo de servicios y el 2,8 % no tiene ninguna clase de asistencia. Si nos centramos en los menores de 14 años las cifras son las siguientes; 65,2% MSP; 25,7% Mutualistas; 1,2% Emergencia Móvil; 10,4% otros; 1,6% sin asistencia. Para los menores de 14 años del interior del país las cifras son las siguientes: 70,5% MSP; 16,2% Mutualistas; 1,4% Emergencia Móvil; 10,2% otros; 1,7% sin asistencia. Hay en promedio un médico cada 249 habitantes.

La mortalidad infantil disminuyó un 20,5% desde que asumió este gobierno, según cifras del Ministerio de Salud Pública. Las cifras han descendido desde 2004, cuando en el país fallecían 13,2 niños de cada mil nacidos vivos. En 2005 el índice se situó en un 12,7 por mil y el año pasado llegó a 10,5, la cifra más baja de la historia. La principal causa del fenómeno es el mayor control de los embarazos y partos. También bajaron la tasa de natalidad de 52 mil en 2002 a 47334 en 2005.^[32]

Hay una alta correlación entre tipo de cobertura, nivel de ingresos y condición de actividad: existe una salud para ricos y una para pobres. El 55% de la población menor de 14 años pertenece al 30% más pobre de los hogares. Casi el 90% de los niños más pobres del país se atienden en el sector público. ^[33]

5. Detrás de la pobreza, la sobre-explotación

El gobierno implantó el PANES y ahora lo sustituye por el Plan de Equidad. Pretende atacar los efectos y no las causas de la “emergencia social”. Por intermedio del PANES instrumentó una política social “focalizada”, en la línea del Banco Mundial y el BID, cuya primera función es actuar como muro de contención a las “clases peligrosas” potencialmente más explosivas.

El asistencialismo abarca hoy a 79 mil hogares con unas 330 mil personas. Cerca de 10 mil hogares ya salieron del programa, 76 mil hogares cobran el ingreso ciudadano; 5642 recibieron tratamiento bucal y 1500 fueron operados en Cuba. El programa de alfabetización “Yo Si Puedo” incluye a 3800 adultos que no tienen educación formal. Fueron entregadas 66 mil tarjetas magnéticas para compras en comercios por valor de 550 pesos. Se recibieron 450 iniciativas de proyectos de producción de los cuales se aprobaron 65 que recibirán dinero, acompañamiento, capacitación, apoyo jurídico y organizativo. Unas 10746 personas pasaron por Trabajo por Uruguay. En 2006 1800 personas pasaron por lo refugios nocturnos de los cuales 180 eran niños. ^[34]

Si tenemos en cuenta que entre el primer semestre de 2005 y el mismo período de 2006 hay 93 mil pobres menos, y que para que este hecho se diera colaboró el crecimiento del empleo y el salario, se puede decir que el PANES que abarcó a 330 mil personas ha tenido un efecto muy limitado en la reversión de los índices de pobreza.

Ahora, el gobierno anuncia el Plan de Equidad que supondría unos U\$S 250 millones y que tendrá una duración de dos años hasta el fin del mandato de Vázquez. Pero en la ley de Rendición de Cuentas, la cantidad para el primer año fue recortada a la mitad.

³² Jorge Basso, director general de la Salud, en Diario La República, 24 de febrero de 2007.

³³ María Julia Muñoz, Ministra de Salud Pública, informe en ADUR, 9 de noviembre de 2006.

³⁴ El PANES después del PANES, Hacia el Último Puerto, Semanario Brecha, 23 de marzo 2007.

Las quejas del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), responden a los cortes que vienen en la próxima Rendición de Cuentas. *“El MIDES aspiraba a contar con 148 millones de dólares para desarrollar el Plan de Equidad, pero Economía asignó menos de la mitad de lo previsto (...) El MIDES entendía que para las asignaciones familiares se destinarían los U\$S 70 millones, más U\$S 8 millones para la creación de las 7.200 pensiones, U\$S 6 millones para la atención a los niños de 0 a 5 años, y otros U\$S 12 millones para el seguro de paro no contributivo (...) A eso se sumarían poco más de U\$S 40 millones para la red alimenticia y otros proyectos productivos.”* ^[35]

Al anuncio de la ministra, de que más de 200 mil personas quedarían sin “beneficios”, el subsecretario de Economía, Mario Bergara, aclaró la posición del gobierno en cuanto a la política asistencial: “El Plan de Equidad tiene una lógica diferente al Plan de Emergencia. Desde el principio se dijo que tenía una duración limitada y va a ir hasta la mitad de este año. Obviamente, en la reformulación de las políticas, van a haber familias que puedan recibir un poco menos si se lo compara con el Plan de Emergencia”. ^[36]

El Plan de Equidad, apuntaría a “reconfigurar un sistema de protección social” con la perspectiva de “generalizar los derechos sociales”, y se complementaría con las otras “reformas” (impositiva, de la salud, y de la educación) Sin embargo, la asignación de recursos para “reducir las desigualdades, no supera el 0,8% del PIB. Es decir, menos que lo asignado al PANES, que era 1% del PIB. Las dos cifras no dejan de ser un verdadero escándalo.

Pero más allá de las cifras y los discursos filantrópicos del gobierno, lo que importa es volver a insistir sobre el marco conceptual en que los “planes contra la pobreza” se ubican.

Primeramente, habría que decir que, cuando la pobreza e indigencia afecta a casi el 30% de la población, el “fenómeno” dejó de ser un problema “focalizado”. Y que, más allá de la amplitud social, detrás de la profundización de la pobreza masiva, están relaciones de explotación y sobre-explotación (sobre este tema volveremos en otro texto). Es, justamente, lo que el marco político-teórico del Banco Mundial omite en todas sus directrices. Las nociones de explotación y sobre-explotación del proletariado (en el sentido amplio que le daba Marx), son remplazadas por una perspectiva de “desarrollo” que combinan una política caritativa con la necesidad de “pactos productivos” que permitan una “distribución de los recursos escasos”. En esta lógica se inscriben las “políticas sociales” del gobierno.

De la misma manera que el gobierno del Frente Amplio y gran parte del sindicalismo (incluidos militantes del clasista y combativo), aceptan las tesis tramposas de la OIT (Oficina Internacional del Trabajo) respecto al salario “digno” y el trabajo “decente”, en el terreno de la pobreza, la desigualdad y la “exclusión” social, el “progresismo” focaliza sobre los efectos.

La pobreza, como manifestación lacerante de la desigualdad, no puede desvincularse de la explotación y sobre-explotación, del desempleo y la flexibilidad, de la precarización del trabajo. ^[37] Es decir, no puede desvincularse de las relaciones sociales capitalistas que aseguran lo que Marx denominaba *“la compulsión silenciosa de las relaciones económicas”*. ^[38]

Y, como observa nítidamente Olin Wright, la explotación se *“define por un tipo concreto de mecanismo mediante en que el bienestar de los explotadores está relacionado causalmente con las privaciones de los explotados. En la explotación, el bienestar material de los explotadores depende causalmente de su capacidad para apropiarse de los frutos del trabajo de los explotados”* ^[39]

³⁵ Loreley Nicrosi, “Malestar. Arismendi y el PCU advierten que no se cumplirá con lo previsto”. El País, 29 de abril 2007.

³⁶ El País, nota citada.

³⁷ Ver artículo de Charles-André Udry, “Reflexiones críticas a propósito del último informe de la OIT”, sobre la relación pobreza y sobre-explotación. Boletín Correspondencia de Prensa, 4 de marzo 2007.

³⁸ Karl Marx, “El Capital”, Volumen I, Siglo XXI editores, México, sexta edición 1982.

³⁹ Eric Olin Wright, “Interrogating Inequality”, citado por Alex Callinicos en “Igualdad”, Siglo XXI editores, Madrid 2003.

Entonces, si nos interesan las causas de la pobreza, como expresión máxima de la desigualdad social, la explotación resulta ser importantísima. A esas causas, el programa del gobierno frenteamplista ni de lejos las roza.

6. Las “reformas estructurales”...de mercado

El gobierno se apresta a implementar una serie de “reformas” (contrarreformas liberales de mercado) que van a tener impacto en la economía y en el ingreso de las personas a las cuales se comprometió con el FMI. El objetivo declarado del gobierno se centraba en fortalecer las finanzas públicas; “reformular” el Banco Central para aumentar su autonomía; mejorar el marco de control del sector financiero; continuar la reforma de los bancos públicos (BROU, BHU, BSE) para revigorizar la intermediación financiera y minimizar contingencias fiscales (a través de una amplia reforma impositiva; la reforma de las cajas de jubilaciones militar policial y bancaria) y reforzar las perspectivas de crecimiento a través de la reforma de empresas públicas y de mejoras en el clima de inversión.

En relación a las empresas publicas y según el gobierno para estimular la inversión del sector privado, que es la única manera de sostener un alto crecimiento, se comprometió con el BID y el Banco Mundial a mejorar el clima de inversión, expandir la participación del sector privado en servicios públicos e infraestructura, a buscar asociaciones en régimen de *joint venture* con socios de capital privado o público y promover el desarrollo de mercados de capital internos.

En el caso de la Reforma Impositiva [40], donde según sus defensores, el 80% de la población va a pagar menos impuestos y sólo un 15% o 20% va a pagar más. Es decir, para el gobierno (y sus asesores del BID que estuvieron en la elaboración), la Reforma Impositiva apuntaría a una “redistribución más igualitaria del ingreso”. Según Barreix y Roca [41] la idea de admitir pocas deducciones y establecer un mínimo no imponible dejaría fuera del alcance del IRPF (Impuesto a la renta de las Personas Físicas) al 60% de la población. Sin embargo, la discusión sobre el impuesto recibe críticas desde la derecha y la izquierda. Ni siquiera en la dirigencia del Frente Amplio existe consenso sobre los efectos económicos y políticos que va a tener la “reforma”.

Por un lado, están los cuestionamientos a ciertos aspectos de la Reforma Impositiva hechos por el senador Alberto Couriel (a nombre del MPP), en particular, el que afectaría a las llamadas “clases medias”, en realidad, sectores de trabajadores y jubilados con ingresos por encima de la media. *“La inquietud es respecto a la reacción de los asalariados, especialmente de ingresos medios o medios-altos, a quienes, por otro lado, se les va a agregar un descuento de tres puntos porcentuales para la reforma de la salud”*. [42]

Por su parte, el diputado socialista José Luis Blasina, defiende la “reforma” integralmente, explicando además que del total de jubilados y pensionistas del BPS (Banco de Previsión Social), que son unos 560.000, el 83% no va a pagar “absolutamente nada” y sólo un 10% va a tributar “algo más, o bastante más, según el monto de su pensión”. Desde el gobierno se insiste con la idea “redistributiva”, alegando que la “reforma” significará una transferencia de 1.64% del ingreso total (después de impuestos) desde el 20% de los hogares más ricos al 80% restante. [43]

Sin embargo, la mayoría de la población está en contra de la reforma según el politólogo Luis Eduardo González, en la medida que la prueba fundamental para la reforma será su impacto sobre los sueldos y las jubilaciones. En la percepción popular es negativa, especialmente al impacto del IRPF Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) sobre los ingresos. Según un

⁴⁰ Punto 7 de la Carta de Intención firmada en junio de 2005 con el FMI.

⁴¹ Barreix y Roca. El tren de la reforma no puede parar. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCUDAL.

⁴² Alberto Couriel, “Hay una serie de puntos fuera del programa”. Entrevista en el semanario Brecha, 25 mayo 2007.

⁴³ Barreix y Roca. Arquitectura de una Propuesta de Reforma Tributaria. UCUDAL abril de 2006.

encuesta de CIFRA, “sólo un 23% dice que está bien que se aplique el impuesto”, mientras que un 47% “considera que está mal que se implemente este gravamen.” [44]

En el caso de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud será financiado a través de la creación de un Seguro Nacional de Salud al cual aportará recursos el Fondo Nacional de Salud como lo establece el proyecto de Ley. La ministra María Julia Muñoz, ya adelantó que “no habrá grandes instituciones perdedoras con la reforma de la salud.” [45] Eso quiere decir, ni más ni menos, que la “reforma” no afectará a las empresas “prestatarias” privadas y que la salud seguirá siendo, como hasta ahora, un lucrativo negocio.

Pese a toda la propaganda del gobierno, la mayoría de la población no sabe bien de que se trata. Una encuesta de Equipos Mori, daba cuenta que “el 55% “escuchó hablar de la reforma, y el 44% no. Sin embargo, del total de personas que dijeron haber oído hablar de la reforma, el 32,1% no supo decir que escuchó. Este factor determina que solamente un 37,6% identifica algún aspecto de la reforma”. Ante la pregunta de que habían escuchado sobre la reforma, la respuesta más frecuente fue: “van a mejorar los sueldos de los médicos” (7,5%), para que todas las personas tengan los mismos derechos. (6%) y para hacer un sistema único de salud (6%)”. Respecto a las demandas de los entrevistados fueron: “mejor infraestructura, más ambulancias (6%) y bajen los costos (4,8%)”. [46]

En el caso de la Caja Bancaria ya AEBU (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay) y el Consejo Honorario de la Caja Bancaria rechazaron el proyecto de reforma. [47] En una declaración del 27 de marzo AEBU plantea entre otras cosas: “No contiene ningún elemento de equilibrio, ya que descarga el 90 % de la contribución sobre los trabajadores activos y pasivos, comprometiendo un mínimo aporte del Estado y reduciendo a la vez la contribución de las empresas. Este criterio es inaceptable, sobre todo teniendo en cuenta que los bancos ganaron 230 millones de dólares en el 2006, prácticamente duplicando las ganancias correspondientes a 2005.” [48]

Respecto a la Reforma del Estado no hay demasiada información, circularon varios documentos y propuestas; el Proyecto SIRO (Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones) referido a la reestructura escalafonaria de los funcionarios públicos pero que contempla a los altos cargos y no al conjunto de los trabajadores, y “La transformación democrática del Estado Lineamientos Generales”, en este borrador se sistematizan las ideas fuerza centrales de la Reforma del Estado: descentralización, participación ciudadana, control social de la gestión pública, participación de los trabajadores en las empresas públicas, cambios en el sistema de compras y sistema electrónico de gobierno.

Los procesos de transformación del estado incluyen: Proceso de modernización de la gestión pública. Proceso de reestructura organizativa de los organismos del Estado. Proceso de reestructura de los recursos humanos del Estado.

Va a estar planteada la “inamovilidad” de los funcionarios públicos y la readecuación salarial, el obstáculo principal van a ser los sindicatos según los analistas políticos [49], esta es una de las explicaciones por las que se puso a la cabeza de la reforma al dirigente de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio.

7. Conclusiones provisionarias

⁴⁴ Luis Eduardo González, encuesta de CIFRA. El País, 5 de mayo 2007.

⁴⁵ Nota titulada “No hay fecha para abrir el corralito de la salud”, a propósito de la exposición de la ministra en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADN) realizado el 25 de abril. El País, 26 de abril 2007.

⁴⁶ Nota titulada “Solo un 37,6% sabe los detalles de la reforma. El País, 26 de abril 2007.

⁴⁷ Sobre la crisis de la Caja Bancaria y la propuesta del gobierno ver: Mario Rossi Garretano, “Una confiscación brutal de salarios y jubilaciones”. Construyendo N° 23, abril 2007.

⁴⁸ Declaración del Consejo Central de AEBU Ante la crisis de la Caja Bancaria, 27 de marzo 2007.

⁴⁹ Entrevista a Luis E. González. Semanario Búsqueda 4-1-07.

Más allá de algunos aspectos que han cambiado los resultados económico-sociales y que se describieron antes, hay que destacar los elementos de continuidad con el “modelo económico” de los años 90. Es decir, continuidad del patrón de acumulación capitalista (llamado “modelo de desarrollo”) que condujo a la espantosa crisis socio-económica entre 1998-2002.

El impulso a las exportaciones, sustentado en las ventas al MERCOSUR (que se expandieron por el aumento en la capacidad de compra en dólares de las poblaciones de nuestros vecinos, por la política cambiaria, y la apertura a nuestros productos y protección a terceros mercados), tocó a su fin. Ante el nuevo paisaje el gobierno busca, desesperadamente, abrir “nuevos mercados” (TIFA con EEUU, posibilidades de TLC con Chile y China, acuerdos con Qatar y los Emiratos Arabes Unidos). También se intenta promover el turismo extra-regional mediatizado por la crisis del MERCOSUR y el impacto del conflicto con Argentina por las plantas de celulosa.

Como la inversión sigue siendo baja (lo que no permitirá aumentar la capacidad instalada de las empresas en especial las industriales que están al límite de su capacidad ociosa), la apuesta del gobierno apunta a las inversiones extranjeras. Ofreciéndoles todo tipo de facilidades y exoneraciones tributarias, cuyo ejemplo más emblemático es la forestación.

Diversos analistas económicos pronostican que, para 2009, habrá “otro país”. Dicen que el cúmulo de proyectos de inversión en infraestructura, turismo y en diversas áreas empresariales (cerca de U\$S 5.000 millones, incluida la ya concretada de Botnia), transformarán al país gobernado por el Frente Amplio de manera profunda: *“Tanto dinero, ladrillos y cemento construirán una envidiable e inédita plataforma electoral para la coalición”*.^[50]

La acumulación de capital para el “nuevo modelo de desarrollo”, se realiza desde los procesos de acumulación internacional (mundialización) que comandan las empresas multinacionales. Lo que vuelve al país más vulnerable a los avatares de la economía capitalista mundial. Es decir, se continúa con la incapacidad de desarrollar procesos de acumulación con un alto componente interno. La concentración y extranjerización de los sectores más dinámicos de la economía es una expresión de ello que este gobierno continúa promoviendo.

A “favor del gobierno”, cuentan algunas condiciones excepcionales: el crecimiento del PIB; la desvalorización de la fuerza de trabajo y el “ahorro” en inversión pública; las buenas condiciones de liquidez financiera internacional y las bajas tasas de interés; el crecimiento de la economía mundial y los altos precios de los productos exportables. La permeabilidad del país al acontecer internacional ha tenido por ahora un impacto favorable excepto por el aumento del precio del petróleo. Esta misma permeabilidad hace sumamente vulnerable la economía a los cambios internacionales.

Por lo tanto, el “éxito” del programa económico del gobierno se mantendrá bajo el cuadro de una “estabilidad” precaria que, para nada le asegura una marcha tranquila en los dos próximos años.

En el plano más coyuntural, lo limitado de la “recuperación” salarial y el empleo, el mantenimiento de altos niveles de pobreza e indigencia, los problemas estructurales de vivienda, y educación, mantienen la crisis social en todos sus términos. El programa del gobierno no avizora cambios sustanciales en estos planos. No hay una política de promoción industrial, el supuesto “país productivo” depende absolutamente de las señales que brindan los mercados.

La lucha por el aumento de los salarios y el empleo va a continuar y tal vez se endurezca si la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones. Puede tener un “impacto positivo” la “Reforma Impositiva” en forma indirecta (en la medida que la mayoría de la masa asalariada que gana como promedio \$ 7. 500 no se vería afectada directamente). Y la “reforma” de la salud en la medida que permita el acceso a ese derecho a franjas que hoy están por fuera sin cobertura médica. Aunque el corazón de la “reforma” está destinado al salvataje de las empresas que lucran con esta necesidad social. De todas formas no hay que subestimar el impacto que ambas “reformas” puedan tener en la conciencia social.

⁵⁰ M. Fernández y A. Nogueira, “2009, otro país”. El Observador Económico, 28 de abril 2007.

Lo sí está fuera de toda duda, es que las “reformas” enfrentarán resistencias sociales. Principalmente de los de los sindicatos estatales, que hasta ahora habían mantenido un capacidad de bloquear las medidas más reaccionarias de las contrarreformas liberales impulsadas durante los gobiernos anteriores. La actual lucha de COFE y los trabajadores de la educación por la Rendición de Cuentas, anuncian que esa resistencia se puede prolongar por lo que queda de gobierno.

Por lo pronto, el PIT-CNT salió a desmarcarse, volviendo a insistir en la tesis de un *“gobierno en disputa”* y a criticar *“una lógica que aleja al gobierno progresista de los intereses populares”*.^[51] Tanto el tono de la proclama del 1º de Mayo, como el énfasis en una serie de demandas que cuestionan el programa económico del gobierno, hacen más visible la contradicción de este discurso (*“ni oficialista, ni opositor”*) con la práctica de conciliación con las patronales y de subordinación a la estrategia gubernamental. Sin embargo, es desde este escenario (el de la organización y la lucha clasista de los trabajadores) donde se desarrolla la confrontación esencial para frenar la ofensiva de los patrones y el gobierno, y en definitiva, para disputar las relaciones de fuerzas entre trabajo y capital.

26 de mayo 2007

⁵¹ Marcelo Abdala, “Pelemos por un cambio de rumbo”. Entrevista en el semanario Brecha, 4 de mayo 2007.